



Recomendación 174/2021

Queja: 1787/2021-I

Conceptos de violación de derechos humanos:

- **A la legalidad y seguridad jurídica**
- **A la igualdad, al trato digno y no discriminación**
- **A los derechos de las personas con discapacidad**

Autoridad a quien se dirige:

- **Al personal que integra el Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco.**

Síntesis

La presente Recomendación se emite por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones del gobierno municipal en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad del estado de Jalisco.





ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES Y HECHOS	9
II.	EVIDENCIAS	15
III.	FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN	15
	3.1. <i>Competencia</i>	15
	3.2. <i>Planteamiento del problema</i>	17
	3.2.1. Análisis estadístico de las personas con discapacidad	18
	3.3. <i>De los derechos humanos transgredidos</i>	24
	3.3.1. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica	24
	3.3.2. Derecho a la igualdad, al trato digno y no discriminación	25
	3.3.3. Derechos de las personas con discapacidad	29
	3.4. <i>Análisis y observaciones</i>	34
IV.	REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO	41
V.	CONCLUSIONES	43
	5.1. <i>Conclusiones</i>	43
	5.2. <i>Recomendaciones</i>	44



TABLA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Para facilitar la lectura de esta Recomendación, el significado de las siglas y acrónimos utilizados son los siguientes:

Significado	Acrónimo o abreviatura
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco	CEDHJ
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	CPEUM
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	CDPD
Persona con discapacidad	PcD

GLOSARIO

Concepto	Definición
Accesibilidad	Las medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad a la infraestructura básica, los inmuebles, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, al transporte, la información y las comunicaciones, servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, para el ejercicio pleno y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y su inclusión a la sociedad.
Acciones afirmativas	Medidas de carácter específico y temporal, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad, prevenir o compensar las desventajas o dificultades en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades que viven las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, bajo los principios de justicia y proporcionalidad.
Ajustes razonables	Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, cuya realización no imponga una carga desproporcionada o afecte derechos de terceros, cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con



	discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Asistencia social	Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Ayudas técnicas	Dispositivos técnicos, tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía e inclusión.
Comunicación	Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Barreras de comunicación	Todo obstáculo producido como consecuencia de la falta o deficiencia en el establecimiento de sistemas de señalización, lenguaje visual y auditivo en áreas o actividades del sector público o privado a las que pueda tener acceso el público en general, que obstaculizan a las personas con discapacidad la comprensión del entorno y su plena integración.
Barreras físicas	Todos aquellos obstáculos y elementos físicos, de ornato y de construcción que dificultan o impidan a las personas con discapacidad, su libre acceso, desplazamiento e interacción en vía pública, edificaciones y servicios públicos.
Barreras sociales y culturales	Aquellas que se generan debido a los prejuicios y actitudes de rechazo, indiferencia o discriminación a que se enfrentan las personas con discapacidad, que



	impiden su inclusión y participación en la comunidad, el libre desplazamiento en lugares públicos o privados, así como el uso y disfrute de los servicios comunitarios.
Discapacidad	Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad física	Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad mental	A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad intelectual	Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad sensorial	Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.



<p>Discriminación por motivos de discapacidad</p>	<p>Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.</p>
<p>Diseño universal</p>	<p>Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No se excluirán las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.</p>
<p>Estenografía proyectada</p>	<p>Apoyos técnicos y humanos que permiten percibir y transmitir diálogos de manera simultánea a su desarrollo, por medios electrónicos, visuales o en sistema de escritura Braille.</p>
<p>Educación inclusiva</p>	<p>Aquella que propicia la inclusión y participación de las personas con discapacidad en las instituciones educativas, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, eliminando los obstáculos materiales que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.</p>
<p>Habilitación</p>	<p>Aplicación coordinada e integral de un conjunto de acciones médicas, psicológicas, educativas y ocupacionales que permitan a las personas con discapacidad congénita, desarrollar su máximo potencial a fin de lograr una óptima integración en los distintos ámbitos en que se desenvuelve.</p>
<p>Lengua de señas mexicana</p>	<p>Lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimientos corporales, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y</p>



	compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
Medidas de nivelación	Aquellas acciones a través de las cuales se busca hacer efectivo el acceso de las personas con discapacidad a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades.
Medidas de inclusión	Aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo, de carácter temporal, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.
Persona con discapacidad	Todo ser humano que tiene ausencia o disminución congénita, genética o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o total, o displasia esquelética de talla baja; que le impida o dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva al medio que lo rodea, de manera temporal o permanente.
Prevención	La adopción de programas, medidas y acciones encaminadas a evitar que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales y psicosociales.
Rehabilitación	Acciones terapéuticas, médicas, psicológicas, sociales, educativas y económicas, con enfoque integral, encaminadas a facilitar que una persona con discapacidad alcance su nivel físico, mental y sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.

Conceptos tomados de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.



Recomendación 174/2021

Guadalajara, Jalisco, a 22 de noviembre de 2021

Asunto: violación al derecho de la legalidad y seguridad jurídica; al derecho a la igualdad, al trato digno y no discriminación; así como a los derechos de las personas con discapacidad.

Queja: 1787/2021-I

Al personal que integra el Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco

Síntesis

La presente Recomendación se emite por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones del gobierno municipal en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad del estado de Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), con fundamento en los artículos 1º, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º y 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 4º, 7º, fracciones XXV y XXVI, 8º, 28, fracción III, 72, 73, 75, 79 y demás relativos de la ley de la CEDHJ, y 6º, párrafo primero, 11, 43, 78, 109 y 119, de su Reglamento Interno, es la instancia competente para conocer de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de Jalisco y emitir medidas precautorias y cautelares, conciliaciones y recomendaciones en su contra. Por ello, esta institución analizó e investigó la queja 1787/2021-I, iniciada de oficio en contra del gobierno municipal de Cabo Corrientes, Jalisco.



I. ANTECEDENTES Y HECHOS

1. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha realizado diversos trabajos de defensa encaminados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, entre los que se encuentran la integración y resolución de expedientes de queja presentados por personas de este grupo social o de los colectivos que las representan, ya que es una problemática reincidente la falta de actuación de las autoridades estatales y municipales en la generación de políticas públicas en beneficio de ellas, y la falta de observancia a los tratados internacionales, legislación federal y local en materia de discapacidad.

Entre las Recomendaciones e informes especiales emitidos destacan: el Diagnóstico e Informe Especial sobre la Situación de las PcD en Jalisco (emitido en junio de 2017);¹ Recomendación general 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco (febrero de 2018);² Informe Especial y Diagnóstico sobre las PcD en Jalisco (diciembre de 2018);³ y el Informe especial sobre el cumplimiento a la Recomendación general 1/2018 (emitido en 2019).⁴

Dentro de estos trabajos se ha solicitado a las autoridades municipales del estado de Jalisco prácticas de efecto inmediato, como, entre otras: impulsar más políticas públicas para erradicar la discriminación, disminuir las brechas de desigualdad, fomentar la inclusión y desarrollo social de las personas con discapacidad; adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción integral sobre accesibilidad, inclusión social y no discriminación; garantizar de forma efectiva y sin simulación que gocen de todos los derechos; vigilar el grado de cumplimiento del derecho a la accesibilidad en sus ayuntamientos; un proyecto de presupuesto de egresos con un enfoque de derechos humanos que incluya

¹ Disponible en:

<http://cedhj.org.mx/recomendaciones/diagnostico%20e%20informe%20especial/2017/8.2017.pdf>

² Disponible en:

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2018/Recos%20Gral/Reco%20Gral_1%202018.pdf

³ Disponible en:

<http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2018/INFORME%20DIAGNOSTICO%20SOBRE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20JALISCO%202018.pdf>

⁴ Disponible en:

<http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2019/Informe%20Especial%20PCD%202019.pdf.pdf>



partidas especiales para su atención; iniciar un estudio situacional en el municipio a su cargo con la finalidad de actualizar el registro municipal de las personas con discapacidad; la armonización legislativa de sus reglamentos para eliminar aquellos términos discriminatorios; la eliminación progresiva de barreras jurídicas y de comunicación para este grupo social; promover ante el cabildo la elaboración de su Reglamento Municipal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, debidamente armonizado con la legislación federal y estatal en la materia; y la implementación de cursos de capacitación y sensibilización en la materia para las y los servidores públicos del ayuntamiento.

También se ha solicitado la elaboración de protocolos y códigos de conducta en la prestación del servicio público hacia la población con discapacidad; la elaboración y difusión de materiales sobre sus derechos; programas y acciones en su beneficio; un proyecto de diseño y desarrollo de sitios *web* accesibles a personas con discapacidad, tanto de su página oficial como la de las demás dependencias que conforman la administración pública municipal; la implementación de un programa focalizado a realizar los ajustes razonables tendentes a la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de edificios, infraestructura urbana, arquitectónica y espacios públicos; vigilar que se les garantice el acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, privados, laborales, educativos, recreativos y en espectáculos públicos; implementación de medidas de nivelación tendentes a la supresión de barreras de información y comunicación consistentes en que los programas, acciones, acceso a la información pública y transparencia se reproduzcan en formatos accesibles.

Durante las labores de seguimiento a la Recomendación general 1/2018 se advirtió que los avances efectuados por los gobiernos municipales del estado de Jalisco han sido mínimos e incluso algunos puntos recomendatorios no presentan avances ni acciones a su favor.

En consecuencia, el 21 de marzo de 2021 esta defensoría pública determinó iniciar queja de oficio contra los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco por omisión y acciones deficientes respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos humanos de accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad que habitan o transitan por el estado, que pueden constituir violaciones de derechos humanos.



2. Así pues, por acuerdo de 12 de abril de 2021, se admitió la queja y se requirió a la persona titular del Ayuntamiento de Cabo Corrientes de un informe de ley que contenga los antecedentes, fundamentos legales y motivaciones de los actos u omisiones señalados en la queja, apercibiéndosele que a la falta de dicho informe, así como su retraso injustificado en su presentación, causará que esta Comisión al momento de resolver la queja en definitiva, declare por ciertos los hechos, salvo prueba en contrario.

Asimismo, se solicitó que, dentro de la respuesta al requerimiento, remitiera información referente a los siguientes cuestionamientos sobre acciones realizadas desde 2018, hasta la fecha:

- 1. ¿El gobierno municipal que representa cuenta con un Reglamento Municipal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, armonizado con lo establecido en la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado?, en caso afirmativo, proporcionar la liga o *link* en el que se encuentra publicado y pueda ser consultado.
- 2. ¿El municipio a su cargo cuenta con una dirección o área especializada en materia de discapacidad?, si cuenta con esa dirección o área describa su estructura, capacidad de personal instalada, perfiles de puesto, misión, visión, objetivo y valores.
- 3. ¿En los últimos tres años qué políticas públicas se han generado en el municipio con la finalidad de erradicar la discriminación y fomentar la inclusión y desarrollo social de las PcD?, mencionar en qué consisten.
- 4. ¿El gobierno municipal que representa ha generado acciones tendentes a que los inmuebles abiertos al público propiedad del Ayuntamiento cuenten con accesibilidad para las PcD?, en caso afirmativo, describa las acciones realizadas y proporcione directorio de los inmuebles accesibles.
- 5. ¿El gobierno municipal cuenta con un programa focalizado a realizar los ajustes razonables tendentes a la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de edificios, infraestructura urbana, arquitectónica y espacios públicos?, en caso afirmativo, describirlos.
- 6. ¿Se ha realizado por parte del municipio algún estudio situacional con la finalidad de actualizar el registro municipal de las personas con discapacidad?, de contar con dicho estudio, describirlo y si está publicado proporcionar la liga o *link* donde puede ser consultado.



- 7. ¿El gobierno municipal a su cargo tiene un proyecto de presupuesto de egresos con enfoque de derechos humanos que incluya partidas especiales para la atención de las personas con discapacidad del municipio?, en caso afirmativo, proporcione la liga o *link* donde se encuentre publicado y pueda ser consultado.
- 8. ¿El gobierno municipal a su cargo cuenta con programas de capacitación y sensibilización para las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de las PcD? En caso afirmativo, describir los contenidos y proporcionar información desagregada, como serían: población objetivo, perfil de las personas a capacitar, sexo, grupos de edad, nivel jerárquico que ocupan y a qué dependencia pertenecen.
- 9. ¿Se han elaborado protocolos y códigos de conducta para la prestación del servicio público hacia las PcD?, de ser así proporcione una descripción de cada uno y si se encuentran publicados proporcione la liga o *link* en donde pueden ser consultados.
- 10. ¿El gobierno municipal a su cargo cuenta con personal especializado para la atención de PcD que domine la Lengua de Señas Mexicana?, y de contar con intérpretes, informe a qué dependencias municipales se encuentran adscritos; en caso afirmativo, informar cuántas personas.
- 11. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito **laboral**? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como el número de personas que se han visto beneficiadas. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o *link* donde puedan ser consultados.
- 12. Relacionado con el punto anterior, informe si el municipio a su cargo cuenta con programas de capacitación e inserción laboral dirigidos a PcD, en los que se les enseñe algún oficio o taller; en caso afirmativo, describirlos e informar el número de personas que se han visto beneficiadas, así mismo, de estar publicados proporcione liga o *link* donde pueden ser consultados.
- 13. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito **educativo**? En caso afirmativo proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían: número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad. En caso de poder ser consultados proporcione liga o *link* donde estén publicados.
- 14. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito de **salud**? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población beneficiada por sexo, rango de edad,



tipo de discapacidad. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o *link* donde puedan ser consultados.

- 15. ¿El municipio cuenta con programas de **rehabilitación** dirigidos a las PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad, y si se les proporciona alguna ayuda técnica (órtesis y prótesis, bastones, muletas, sillas de ruedas especiales, ayudas ópticas, implante coclear, entre otros). En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o *link* donde puedan ser consultados.
- 16. ¿El municipio cuenta con programas **sociales** dirigidos a las PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o *link* donde puedan ser consultados.
- 17. ¿El municipio cuenta con programas de **apoyo a cuidadores** de PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población que se dedica a ello, rango de edad, y en qué consisten los apoyos que se les brindan. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o *link* donde puedan ser consultados.
- 18. ¿El municipio cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a PcD, para que ingresen al servicio público municipal, o bien a la iniciativa privada?, en caso afirmativo, describa en qué consiste esta bolsa de trabajo e informe el número de personas beneficiadas.
- 19. Con base en sus atribuciones, mencione la cantidad de personas por las que está constituida la plantilla laboral del Gobierno Municipal a su cargo y de este total refiera cuantas PcD trabajan en él, proporcionando los siguientes datos, número de trabajadores que presentan una discapacidad, sexo, edad, escolaridad, tipo de discapacidad, dependencia en la que está adscrita (o) y las herramientas que se les proporcionan para desempeñar sus funciones.
- 20. ¿El gobierno municipal a su cargo dispone de sitios *web* accesibles a personas con discapacidad tanto de su página oficial, como la de las demás dependencias que conforman la administración pública municipal?, de ser afirmativo, proporcionar los *link* para ingresar.
- 21. ¿El municipio cuenta con algún mecanismo de vigilancia para garantizar a las personas con discapacidad el acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, privados, laborales, educativos, recreativos, y en espectáculos públicos?, describir en qué consiste.



- 22. ¿Qué acciones ha realizado el municipio para suprimir barreras de información y comunicación?, si cuenta con programas, acciones, acceso a la información pública y transparencia, en formatos accesibles, lenguaje de señas mexicanas y sistema braille, describir en qué consisten.

3. El acuerdo de radicación fue debidamente notificado el 12 de abril del 2021, a través del correo electrónico: presidencia@cabocorrientes.gob.mx; y su recepción se confirmó por la misma vía el 12 de abril del año en curso a las 11:55 horas, según consta en actuaciones.

4. El 10 de mayo de 2021 se ordenó la apertura del periodo probatorio para que la autoridad municipal remitiera a esta Comisión, todos los elementos de prueba relacionados con los hechos materia de la queja.

5. Dicho acuerdo fue debidamente notificado el 14 de mayo del 2021, a través del correo electrónico: presidencia@cabocorrientes.gob.mx; y su recepción se confirmó por la misma vía el 17 de mayo del año en curso a las 10:35 horas, según consta en actuaciones.

6. El 14 de junio de 2021, se solicitó el apoyo y colaboración del Área de Seguimiento de esta CEDHJ, para que proporcionara la siguiente información:

1. ¿Cuáles fueron los municipios que aceptaron la Recomendación General 1/2018? Además, proporcione el número de oficio, la fecha, el nombre y el cargo de quienes suscribieron el documento mediante el cual, aceptaron la citada Recomendación.
2. ¿Cuáles fueron los municipios que no aceptaron o bien, no se pronunciaron respecto de la Recomendación General 1/2018?

7. El 18 de junio de 2021, a través del oficio JRGF/2391/2021, el Área de Seguimiento de este organismo, informó, entre otras cosas, que el municipio de Cabo Corrientes sí aceptó la Recomendación General 1/2018, mediante oficio PM14020/2018 suscrito por el presidente municipal, Prisciliano Ramírez Gordían.



8. El 1 de agosto de 2021, se decretó el cierre del periodo probatorio y se ordenó elaborar el proyecto de Recomendación, de conformidad con lo establecido por el artículo 73 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

II. EVIDENCIAS.

1. Instrumental de actuaciones consistente en la queja que se inició de manera oficiosa en contra del gobierno municipal de Cabo Corrientes, por la omisión y acciones deficientes en detrimento de los derechos humanos de accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad que habitan o transitan por el municipio en cuestión.

2. Instrumental de actuaciones consistente en las constancias y acuerdos que obran dentro del expediente de queja.

3. Documentales públicas consistentes en las Recomendaciones, informes especiales y peticiones que esta Comisión ha emitido en materia de Discapacidad.

4. Instrumental de actuaciones consistente en el oficio JRGF/2391/2021 del Área de Seguimiento de este organismo; cuyo contenido ya fue descrito en el apartado correspondiente de antecedentes y hechos del presente resolutivo.

III. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

3.1. Competencia.

La CEDHJ tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. Es por ello que es competente para conocer de los hechos aquí investigados, relacionados con la inobservancia al deber de la debida diligencia reforzada para garantizar el cumplimiento de la Recomendación General 1/2018 emitida por esta defensoría pública de derechos humanos, así como las obligaciones que a los municipios impone La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),



tratados internacionales, leyes federales, estatales y municipales respecto de la promoción, protección y pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, según lo establecen los artículos 1° y 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y lo tutelan los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, fracción I; así como 7° y 8° de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esta competencia se ve reforzada por el artículo 33, punto 2 de la CDPD, y al artículo 33 bis de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, que le confiere atribuciones a esta Comisión como operador jurídico local en materia de derechos humanos y como órgano de control de seguimiento de la CDPD.

Asimismo, este organismo precisa que los actos y omisiones a que se refiere esta Recomendación, atribuidos al gobierno municipal de Cabo Corrientes, se analizan desde sus respectivas facultades y atribuciones en materia de discapacidad; con la finalidad de que, mediante el análisis de los actos y omisiones violatorios a derechos humanos expuestos en el presente documento, se lleven a cabo acciones afirmativas para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

El sustento jurídico de esta determinación se basa en principios constitucionales y en una interpretación sistémica interna y externa, integral, literal, histórica, principalista y comparatista tanto de la legislación vigente, como de nuestro modelo de gobierno y las políticas públicas que implementa para atender la agenda de personas con discapacidad.

Para determinar las vulneraciones de derechos, esta defensoría aplicó el método deductivo para el análisis de los deberes jurídicos que surgen de la Recomendación General y las legislaciones citadas, y de los postulados jurídicos que surgen de las leyes aplicables, complementado con el método inductivo de análisis de pruebas y evidencias recabadas sobre el grado de cumplimiento que se ha dado al respecto, haciendo énfasis en el análisis comparado de las obligaciones que tiene el municipio en materia del deber de “hacer” e implementar políticas públicas que resulten necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad.



3.2. Planteamiento del problema.

Los gobiernos municipales de nuestra entidad federativa tienen como deberes y obligaciones promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, lo que abarca una serie de condiciones fundamentales como la accesibilidad, inclusión, no discriminación, igualdad, salud, educación, empleo, rehabilitación y participación en la vida política.

Para ello deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que resulten necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, son reiteradas las omisiones e incumplimiento de los gobiernos municipales en las obligaciones que les mandatan tratados internacionales suscritos y ratificados por México como la CDPD, así como la legislación interna, comenzando por la propia CPEUM y la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, entre otras, respecto a la planeación, diseño y ejecución de políticas públicas municipales encaminadas a disminuir y erradicar las brechas de desigualdad y discriminación de este grupo de la población.

Esta Comisión ha elaborado y emitido diagnósticos e informes especiales sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco, y como trabajos más recientes la Recomendación General 1/2018 Sobre la Accesibilidad, Inclusión, Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco y el Informe Especial 2019 sobre el cumplimiento a dicha Recomendación. Motivo por el cual se estimó necesario iniciar la presente queja de oficio dirigida al gobierno municipal de Cabo Corrientes, para que, en el ámbito de su competencia diera inicio a las acciones que permitan abordar el tema de discapacidad de manera integral, ya que hasta el momento las acciones han sido insuficientes para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

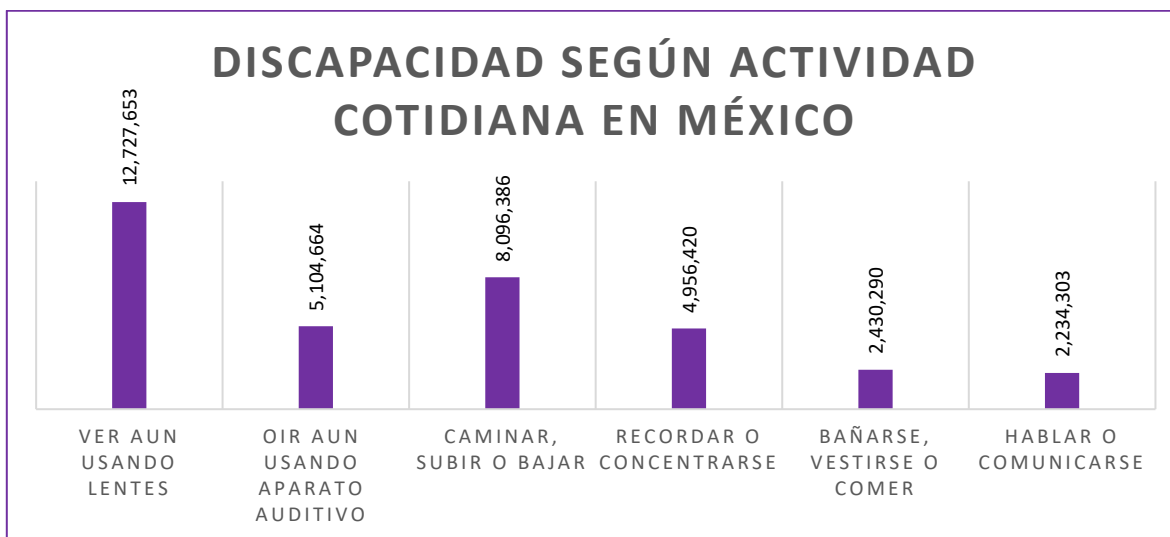
Este trabajo busca propiciar la participación responsable de las autoridades municipales que abonen a la plena garantía, promoción y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, y que de manera conjunta nos permita migrar hacia a un modelo social con enfoque de derechos humanos que

contribuya a la generación de condiciones que permitan alcanzar la plena inclusión de este sector poblacional.

3.2.1. Análisis estadístico de las personas con discapacidad.

Personas con discapacidad en México

El censo realizado por el INEGI en el año 2020, incluyó el conteo de personas con algún tipo de limitación o discapacidad, es de 20 millones 838 mil 108 personas en todo el país. Representa el 16.5%; la mayor parte son mujeres en esta condición, suman 11 millones 111 mil 237 (53%), en tanto que 9 millones 726 mil 871 (47 %), son hombres.



Elaboración propia de la CEDHJ a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2021)

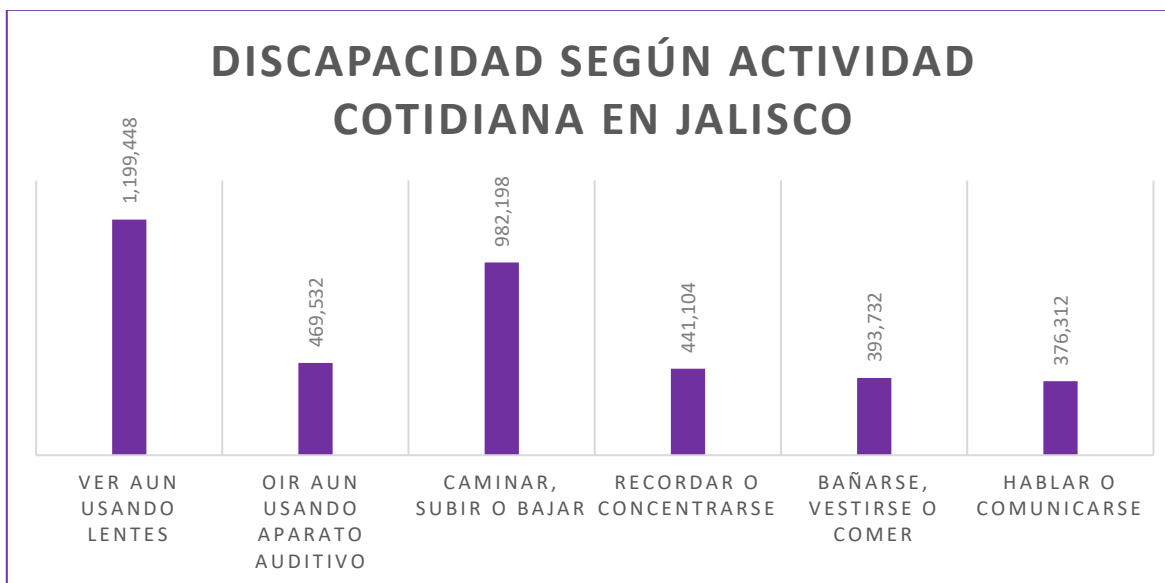
Personas con discapacidad en Jalisco

En Jalisco, habitan 8'348,151 personas: 4'098,455 (49.1%) hombres y 4'249,696 (50.9%) mujeres, según el Censo de Población y Vivienda 2020.

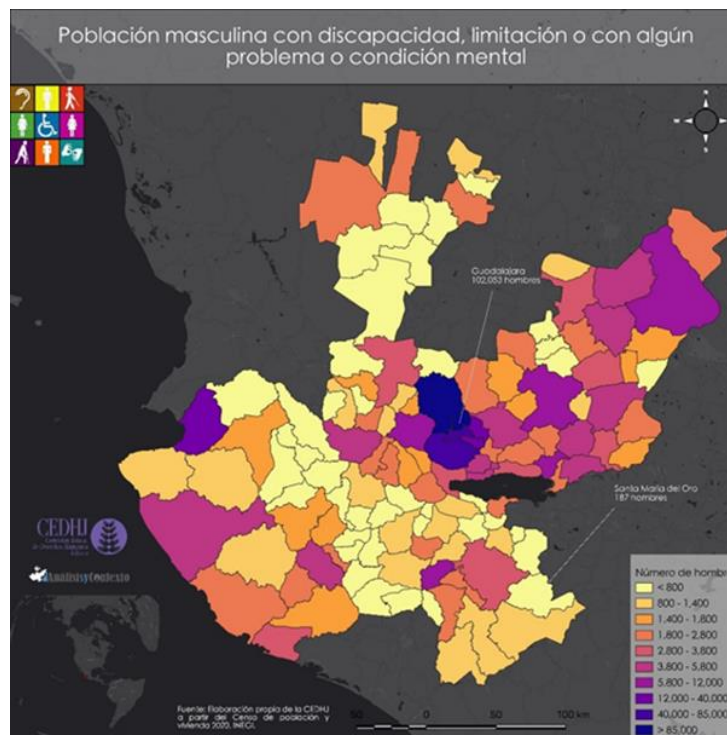
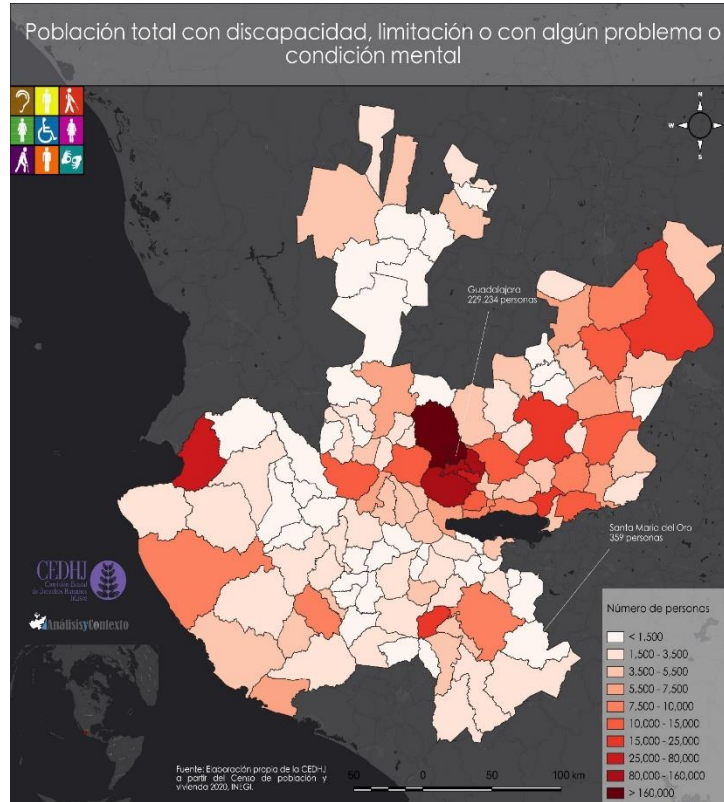
La Entidad, registra 1 millón 264 mil 817 personas (15.2% del País); la mayor parte son mujeres, con un 53.4 %, en tanto que los hombres con discapacidad representan el 46.6 %.

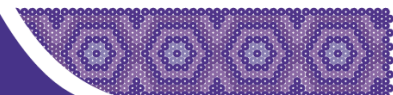
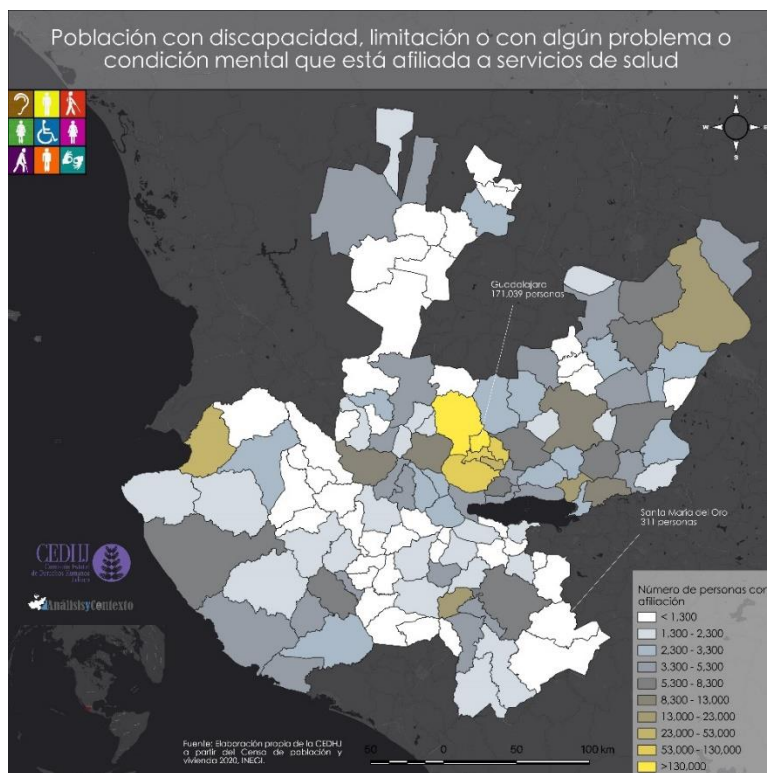
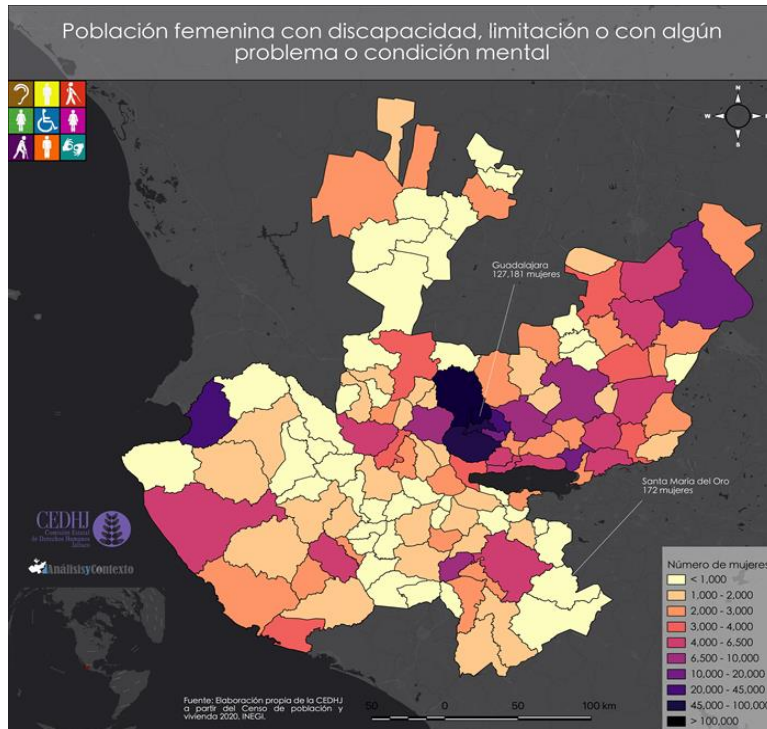


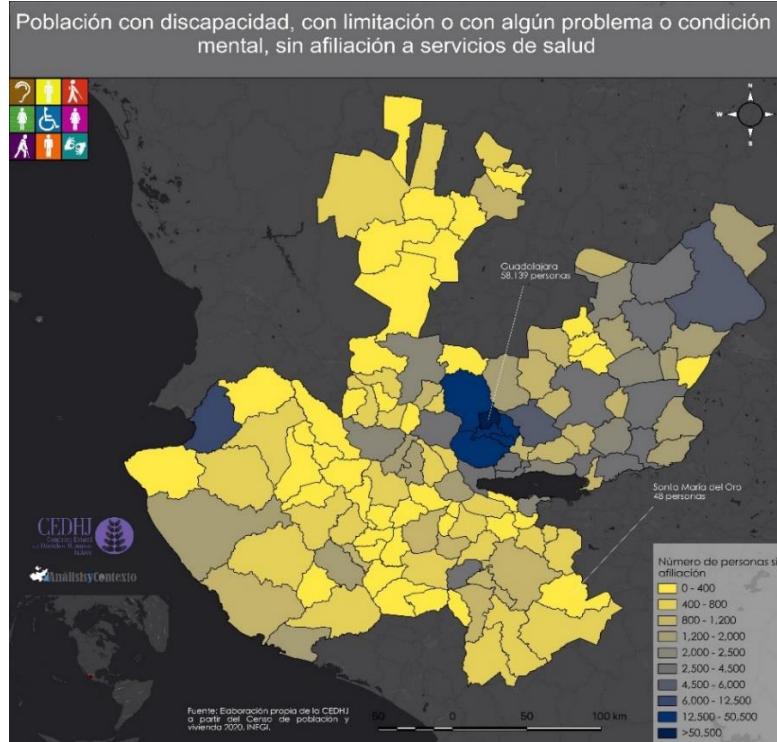
Elaboración propia de la CEDHJ a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2021)



Elaboración propia de la CEDHJ a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2021)







Información relativa al municipio de Cabo Corrientes

Cabo Corriente tiene una población de 10,940 personas: 5,644 hombres y 5,296 mujeres.

En el municipio, 1,994 personas presentan algún tipo de discapacidad y/o limitación; en este grupo 1,017 hombres y 977 mujeres.

El rango de edad de los hombres con discapacidad se identifica principalmente de los 60 a 64 años; en el caso de las mujeres, de los 65 a 69 años.



Gráfico. Personas con discapacidad que cuentan con prestación médica en Cabo Corrientes.

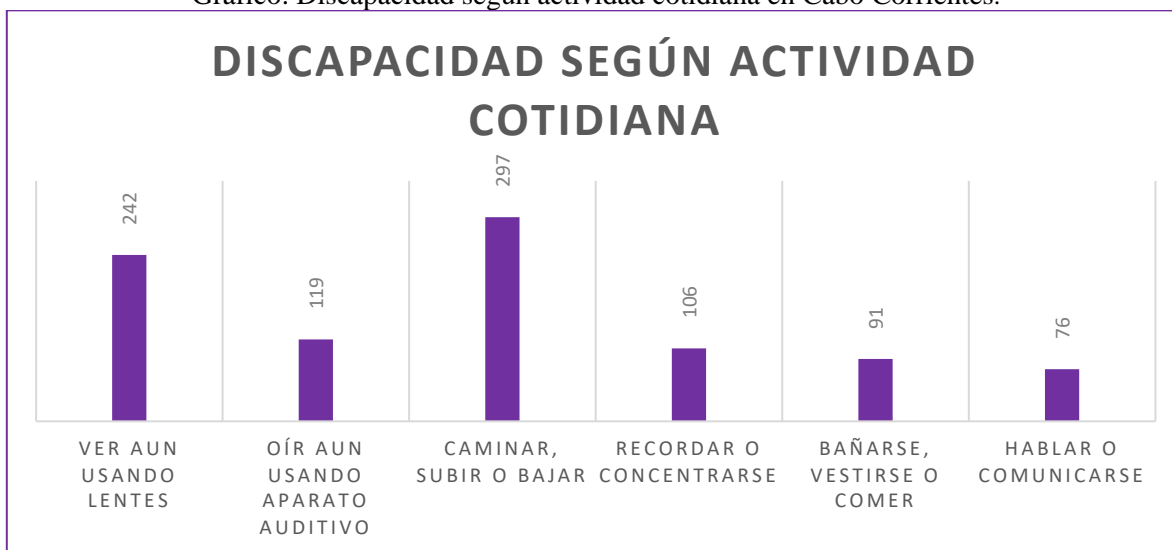


Elaboración propia de la CEDHJ a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2021)

El tipo principal de discapacidad y/o limitación en el municipio, es la motriz (imposibilidad de caminar o subir escaleras), y se registra en 297 personas: 153 hombres y 144 mujeres.

En segundo lugar, se encuentra la dificultad para ver aun usando lentes; esta capacidad se encuentra afectada en 242 personas: 126 hombres y 116 mujeres.

Gráfico. Discapacidad según actividad cotidiana en Cabo Corrientes.



Elaboración propia de la CEDHJ a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2021)



3.3. De los derechos humanos transgredidos

3.3.1. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

El derecho a la legalidad y seguridad jurídica implica que todos los actos de la administración pública se realicen con apego al orden jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las personas.

Dentro de sus vertientes, se encuentra el derecho al debido funcionamiento de la administración pública, y algunas modalidades de la violación a estos derechos las constituyen el ejercicio indebido de la función pública.

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia adecuada del orden jurídico por parte del Estado, entendiéndose por este la permanencia en un estado de disfrute de los derechos concebidos en el ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación.

Por su parte, la seguridad jurídica supone la existencia de ordenamientos necesarios y suficientes, para garantizar los derechos y libertades fundamentales desde la legalidad.

En lo referente a las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad, se encuentra una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso, la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además, un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho.

Implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un perjuicio; como contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean estas conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo.

La legalidad y seguridad jurídica, como principios del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, se establecen desde el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se señala que estos deben ser protegidos por un régimen de derecho y que los Estados miembros se



comprometen a asegurar su respeto universal y efectivo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también refiere de forma preliminar la fundamentación de los deberes como parte del orden jurídico.

El principio de legalidad en la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca una protección internacional al señalar que debe de ser de naturaleza convencional, coadyuvante y complementaria al derecho interno.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen en sus preámbulos la necesidad de crear condiciones para lograr el disfrute de los derechos y libertades, asumiendo la obligación de los Estados para hacerlos efectivos.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica se encuentran garantizados de forma integral en el contenido de sus 136 artículos, los cuales son el marco jurídico general a cumplir por parte de los elementos del Estado mexicano; de forma específica, son los artículos 14, 16 y 17 los que históricamente se han considerado como el punto de referencia para sustentar el principio de legalidad y seguridad jurídica en el sistema jurídico, ya que estos se refieren a la protección legal de las personas.

Por su parte, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, en su artículo 48 fracciones I, II y VIII obliga a toda persona servidora pública a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, así como observar buena conducta, tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación, con motivo de sus funciones.

3.3.2. Derecho a la igualdad, al trato digno y no discriminación.

El derecho a la igualdad es la prerrogativa que se le reconoce a todas las personas para disfrutar de los derechos establecidos y protegidos por la CPEUM y todos los tratados suscritos y ratificados por México, garantizando condiciones equitativas para todas las personas al atender circunstancias



particulares, evitando todo tipo de discriminación motivada por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Este derecho tiene a la igualdad como bien jurídico protegido, los sujetos titulares son todas las personas, mientras que los obligados son cualquier persona servidora pública o particulares que actúen bajo la anuencia o tolerancia de las o los titulares, mediante acciones u omisiones, directa o indirectamente, que vulneren la seguridad jurídica de él o la titular del derecho en cuanto al estricto cumplimiento del orden jurídico por parte del Estado.

Dentro del derecho a la igualdad se prevé la tutela de los grupos en situación de vulnerabilidad, que, en virtud de su edad, raza, sexo, condición económica, social, características físicas, circunstancias culturales y políticas, preferencia y orientación sexual, y otros factores que contribuyen a que pueden encontrar mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos.

La tutela del derecho a la igualdad reviste una particular protección en los diversos instrumentos internacionales suscritos por México; primeramente, en nuestra Carta Magna se establece lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]



Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En la Constitución Política del Estado de Jalisco, se establece:

Artículo 4. Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala lo siguiente:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.



Por su parte, los artículos 11 y 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece el derecho de las personas a la protección de la ley, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, su domicilio, de ataques ilegales a su honra, su dignidad o reputación. A su vez, el artículo 26 establece:

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todas las personas son iguales ante la ley. Reconoce en los artículos 1 y 2 el deber del Estado de respetar los derechos y libertades, así como garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, además de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley.

En cuanto al trato digno, es el derecho a contar con condiciones materiales de trato acordes con las expectativas de un mínimo de bienestar generalmente aceptadas por los seres humanos.

Su estructura jurídica implica para todas las personas servidoras públicas abstenerse de practicar tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes en el desempeño de sus funciones. Implica también la facultad de ejercicio obligatorio de las y los servidores públicos, de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, de llevar a cabo las conductas que creen las condiciones necesarias para que se verifique el mínimo de bienestar.

Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido.

En cuanto al acto:

1. La realización de cualquier conducta que afecte el mínimo de bienestar, particularmente aquellas que impliquen un trato humillante, vergonzoso o denigrante.



2. El no llevar a cabo las conductas necesarias, dentro de la esfera de competencias de cada persona servidora pública, para alcanzar las condiciones mínimas de bienestar.

En cuanto al sujeto:

Toda persona servidora pública dentro de su respectiva esfera de competencias.

En cuanto al resultado:

Que como producto de la realización de la conducta de la persona servidora pública se vulneren las condiciones mínimas de bienestar.

En el ámbito local, el derecho al trato digno encuentra su fundamentación en el artículo 1° de la CPEUM. Asimismo, en el ámbito internacional lo hallamos en el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los artículos 1° y 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los artículos 1.1 y 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3.3.3. Derechos de las personas con discapacidad.

El estado mexicano reconoce en diversos instrumentos normativos locales e internacionales los derechos humanos de las PcD para lograr su desarrollo integral e inclusión social, particularmente podemos mencionar entre ellas como principales fuentes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, así como las observaciones generales y recomendaciones dirigidas al estado mexicano que en la materia ha emitido el Comité de Derechos Humanos.

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Este tratado es el estándar internacional rector de la inclusión de las personas con discapacidad. Tiene como propósito fomentar, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades



fundamentales para todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.

El artículo 1° de la Convención establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Los principios de la Convención son:

- a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- b) La no discriminación;
- c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- e) La igualdad de oportunidades;
- f) La accesibilidad;
- g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
- h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Observaciones Generales del Comité de la CDPD⁵

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano de personas expertas independientes que supervisa y monitorea la aplicación de la Convención, ha emitido las siguientes Observaciones generales:

⁵ Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. *Informe especial sobre el cumplimiento a la Recomendación General 1/2018 Sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco 2019*, páginas 30 y 31. México, febrero 2020.



- 1 • Observación general 1 (2014) Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
- 2 • Observación general 2 (2014). Artículo 9. Accesibilidad
- 3 • Observación general 3 (2016) Sobre las mujeres y las niñas con discapacidad
- 4 • Observación general 4 (2016) Sobre el derecho a la educación inclusiva
- 5 • Observación general 5 (2017) Sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
- 6 • Observación general 6 (2018) Sobre la igualdad y la no discriminación
- 7 • Observación general 7 (2018) Sobre la participación de las PcD, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención

Estas Observaciones generales representan directrices y lineamientos para que los estados parte adopten las acciones administrativas, legislativas y judiciales en aras de velar por la debida aplicación de la CDPC, y que representan un estándar internacional para el respeto, garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Las Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU⁶

Entre los instrumentos para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos se encuentra el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) que, a través del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emite recomendaciones a los Estados miembros. Dichas recomendaciones son de carácter vinculatorio, de acuerdo con la Convención, y sugieren que, el Estado Mexicano debe realizar

⁶ *Idem p. 30, 43 a 47.*



ajustes o implementar acciones a fin de responder satisfactoriamente al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Con la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 se actualizó el principio de igualdad y no discriminación para la protección de personas que viven en alguna situación de vulnerabilidad, entre ellas las que tengan algún tipo de discapacidad, con ello se visibilizó aún más el compromiso de nuestras autoridades de eliminar todas las barreras sociales, culturales, de comunicación, físicas y de cualquier índole que obstaculicen el desarrollo integral de las personas con discapacidad, su inclusión al medio social que las rodea y a una vida libre de discriminación.

Las recomendaciones emitidas al Estado mexicano se centran principalmente en las temáticas siguientes:

CDPD Artículos	Temática
1 a 4	Principios y obligaciones generales
5	Igualdad y no discriminación
6	Mujeres con discapacidad
7	Niñas y niños con discapacidad
8	Toma de conciencia
9	Accesibilidad
11	Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
12	Igual reconocimiento como personas antes la ley
13	Acceso a la justicia
14	Libertad y seguridad de la persona
15	Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
16	Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
17	Protección de la integridad personal
18	Libertad de desplazamiento y nacionalidad
19	Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad



23	Respeto del hogar y de la familia
24	Educación
25	Salud
27	Trabajo y empleo
28	Nivel de vida adecuado y protección social
29	Participación en la vida política y pública
30	Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
31	Recopilación de datos y estadísticas
33	Aplicación y seguimiento nacionales

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Este cuerpo normativo establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.

En su artículo 1º señala que las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de observancia general y tiene por objeto:

- I. Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como su inclusión social dentro de un marco legal que fomente el respeto y garantice la igualdad de oportunidades;
- II. Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad y su inclusión al medio social que los rodea, libre de discriminación;



III. Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad;

IV. Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de las instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley;

V. Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de los objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus acciones.

Mientras que en su artículo 3°, fracción II establece que la aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde, en su respectivo ámbito de su competencia a los municipios, a través del Gobierno Municipal y de los organismos e instituciones que estén bajo su regulación.

Asimismo, en su artículo 35 establece que, a los municipios, les corresponde coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, señalando sus atribuciones y competencias de los Ayuntamientos.

3.4. Análisis y observaciones

Como se estableció previamente, esta defensoría pública inició de manera oficiosa la integración de 125 quejas para identificar si los municipios que forman parte de esta entidad federativa han dado cumplimiento a las obligaciones que legalmente les han sido conferidas para garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, y en su caso a establecer la pertinencia de sus acciones.

En ese sentido, se requirió a la persona titular del Ayuntamiento de Cabo Corrientes un informe de ley en el que informara las acciones implementadas para el cumplimiento de la Recomendación General 1/2018, al mismo tiempo que le fueron dirigidos 22 cuestionamientos relativos a acciones específicas a favor de las personas con discapacidad, sin embargo, a pesar de que la autoridad municipal fue debidamente notificada, fue omisa en atender al requerimiento efectuado por esta Comisión.

Por ello, y al no existir prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 61 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tienen por ciertos los hechos motivo de la queja, así



como los actos u omisiones señalados en contra del gobierno municipal de Cabo Corrientes.

Derivado del silencio de la autoridad respecto de sus obligaciones, se dan a conocer los resultados obtenidos mediante la siguiente tabla:

Reactivo	Nivel de garantía	Observaciones
1. ¿El gobierno municipal que representa cuenta con un Reglamento Municipal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, armonizado con lo establecido en la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado?, en caso afirmativo, proporcionar la liga o <i>link</i> en el que se encuentra publicado y pueda ser consultado.	Nulo	No se manifestó.
2. ¿El municipio a su cargo cuenta con una dirección o área especializada en materia de discapacidad?, si cuenta con esa dirección o área describa su estructura, capacidad de personal instalada, perfiles de puesto, misión, visión, objetivo y valores.	Nulo	No se manifestó.
3. ¿En los últimos tres años qué políticas públicas se han generado en el municipio con la finalidad de erradicar la discriminación y fomentar la inclusión y desarrollo social de las PcD?, mencionar en qué consisten.	Nulo	No se manifestó.
4. ¿El gobierno municipal que representa ha generado acciones tendentes a que los inmuebles abiertos al público propiedad del Ayuntamiento cuenten con accesibilidad para las PcD?, en caso afirmativo, describa las acciones realizadas y proporcione directorio de los inmuebles accesibles.	Nulo	No se manifestó.



<p>5. ¿El gobierno municipal cuenta con un programa focalizado a realizar los ajustes razonables tendientes a la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de edificios, infraestructura urbana, arquitectónica y espacios públicos?, en caso afirmativo, describirlos.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>6. ¿Se ha realizado por parte del municipio algún estudio situacional con la finalidad de actualizar el registro municipal de las personas con discapacidad?, de contar con dicho estudio, describirlo y si está publicado proporcionar la liga o link donde puede ser consultado.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>7. ¿El gobierno municipal a su cargo tiene un proyecto de presupuesto de egresos con enfoque de derechos humanos que incluya partidas especiales para la atención de las personas con discapacidad del municipio?, en caso afirmativo, proporcione la liga o <i>link</i> donde se encuentre publicado y pueda ser consultado.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>8. ¿El gobierno municipal a su cargo cuenta con programas de capacitación y sensibilización para las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de las PcD? En caso afirmativo, describir los contenidos y proporcionar información desagregada, como serían: población objetivo, perfil de las personas a capacitar, sexo, grupos de edad, nivel jerárquico que ocupan y a qué dependencia pertenecen.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>9. ¿Se han elaborado protocolos y códigos de conducta para la prestación del servicio público hacia las PcD?, de ser así proporcione una descripción de cada uno y si se encuentran publicados proporcione la liga o <i>link</i> en donde pueden ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>



<p>10. ¿El gobierno municipal a su cargo cuenta con personal especializado para la atención de PcD que domine la Lengua de Señas Mexicana?, y de contar con intérpretes, informe a qué dependencias municipales se encuentran adscritos; en caso afirmativo, informar cuántas personas.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>11. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito laboral? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como el número de personas que se han visto beneficiadas. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o <i>link</i> donde puedan ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>12. Relacionado con el punto anterior, informe si el municipio a su cargo cuenta con programas de capacitación e inserción laboral dirigidos a PcD, en los que se les enseñe algún oficio o taller; en caso afirmativo, describirlos e informar el número de personas que se han visto beneficiadas, así mismo, de estar publicados proporcione liga o <i>link</i> donde pueden ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>13. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito educativo? En caso afirmativo proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían: número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad. En caso de poder ser consultados proporcione liga o <i>link</i> donde estén publicados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>14. ¿El municipio cuenta con programas sobre accesibilidad, inclusión y no discriminación de las PcD en el ámbito de salud? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>



<p>beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o <i>link</i> donde puedan ser consultados.</p>		
<p>15. ¿El municipio cuenta con programas de rehabilitación dirigidos a las PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad, y si se les proporciona alguna ayuda técnica (órtesis y prótesis, bastones, muletas, sillas de ruedas especiales, ayudas ópticas, implante coclear, entre otros). En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o <i>link</i> donde puedan ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>16. ¿El municipio cuenta con programas sociales dirigidos a las PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población beneficiada por sexo, rango de edad, tipo de discapacidad. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o <i>link</i> donde puedan ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>17. ¿El municipio cuenta con programas de apoyo a cuidadores de PcD? En caso afirmativo, proporcione los nombres, descripción y en qué consisten dichos programas, así como otros datos desagregados como serían; número de población que se dedica a ello, rango de edad, y en qué consisten los apoyos que se les brindan. En caso de encontrarse publicados, proporcione liga o <i>link</i> donde puedan ser consultados.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>18. ¿El municipio cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a PcD, para que ingresen al servicio público municipal, o bien a la iniciativa privada?, en caso afirmativo, describa en qué consiste esta bolsa de trabajo e informe el número de personas beneficiadas.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>



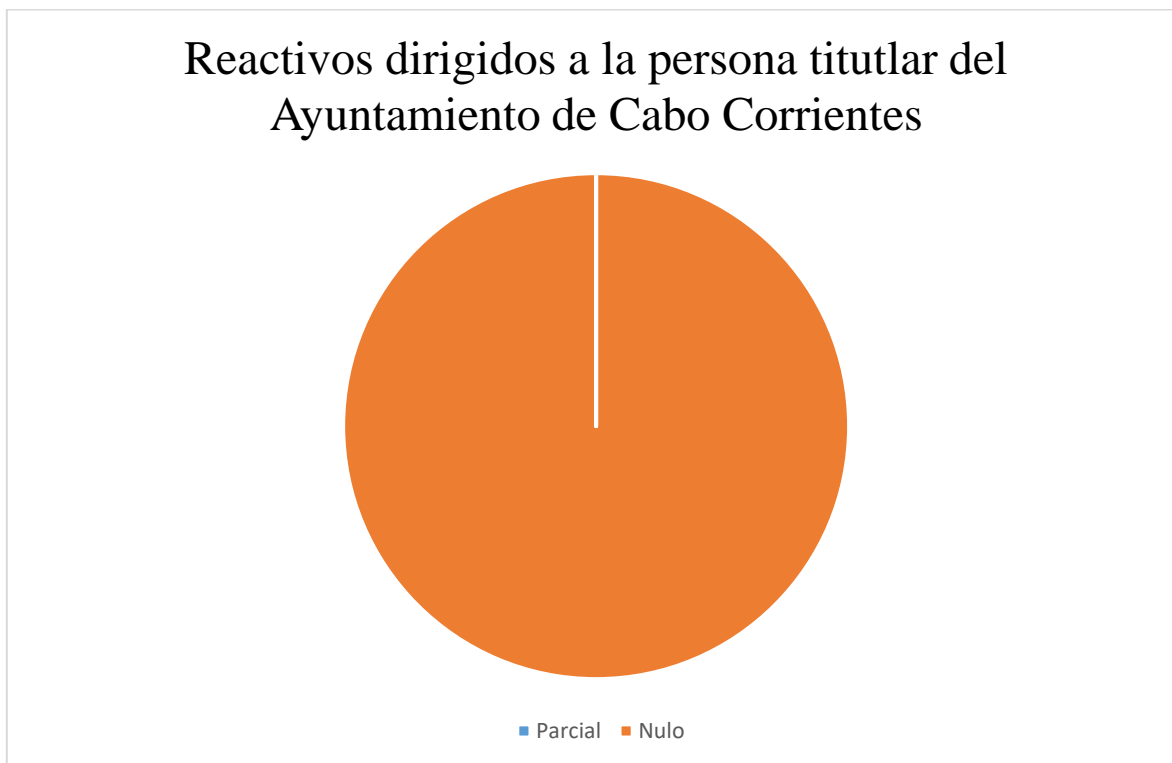
<p>19. Con base en sus atribuciones, mencione la cantidad de personas por las que está constituida la plantilla laboral del Gobierno Municipal a su cargo y de este total refiera cuantas PcD trabajan en él, proporcionando los siguientes datos, número de trabajadores que presentan una discapacidad, sexo, edad, escolaridad, tipo de discapacidad, dependencia en la que está adscrita (o) y las herramientas que se les proporcionan para desempeñar sus funciones.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>20. ¿El gobierno municipal a su cargo dispone de sitios <i>web</i> accesibles a personas con discapacidad tanto de su página oficial, como la de las demás dependencias que conforman la administración pública municipal?, de ser afirmativo, proporcionar los <i>link</i> para ingresar.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>21. ¿El municipio cuenta con algún mecanismo de vigilancia para garantizar a las personas con discapacidad el acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, privados, laborales, educativos, recreativos, y en espectáculos públicos?, describir en qué consiste.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>
<p>22. ¿Qué acciones ha realizado el municipio para suprimir barreras de información y comunicación?, si cuenta con programas, acciones, acceso a la información pública y transparencia, en formatos accesibles, lengua de señas mexicanas y sistema braille, describir en qué consisten.</p>	<p>Nulo</p>	<p>No se manifestó.</p>

Tabla: elaboración propia de la CEDHJ, con los datos obtenidos durante la integración de la queja.

Una vez analizado lo anterior, este organismo estima que, con relación a los cuestionamientos formulados, el municipio de Cabo Corrientes ha incumplido en garantizar los derechos de las personas con discapacidad, esto se deduce luego de la omisión por parte del municipio en responder al requerimiento efectuado por esta Comisión.



Para una mejor comprensión del análisis de los resultados, se muestran a continuación las siguientes gráficas:



Ayuntamiento de Cabo Corrientes	Reactivos	Total	Porcentaje
Garantía parcial		0	0%
Garantía Nula	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.	22	100 %

Nota: los resultados muestran el grado de garantía a los derechos de las personas con discapacidad por el Ayuntamiento de Cabo Corrientes con la información recabada durante la integración de la queja materia de la presente Recomendación. Elaboración propia de la CEDHJ.



IV. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

Un Estado constitucional y democrático de derecho debe ser garante de la protección de los derechos humanos; su responsabilidad y obligación es responder a las víctimas de violaciones causadas por la acción u omisión de los órganos de gobierno, del funcionariado, de las y los servidores públicos, mediante la reparación integral del daño y las garantías de la no repetición de los hechos.

La reparación integral del daño a las víctimas de violaciones de los derechos humanos se basa en gran medida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El concepto “reparación integral” tiene su fundamento en los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y abarca la acreditación de daños en las esferas material⁷ e inmaterial⁸, y el otorgamiento de medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

La Legislación nacional establece como formas de reparación: las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a su vez, la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco identifican a las víctimas directas o indirectas, como aquellas personas, grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sufrido daño o menoscabo de sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos producto de una violación de derechos humanos o cuando el daño comporte un impacto colectivo.

⁷ La reparación del daño material se conoce como la pérdida de ingresos, gastos médicos, los gastos incurridos en la búsqueda de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación, y otros gastos de carácter pecuniario que son causados por la violación. Cfr. Julio José Rojas Báez, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf>

⁸ La reparación del daño inmaterial se conoce puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia, *Ibidem*.



Ambas legislaciones se refieren a la reparación del daño colectivo en los siguientes términos:

Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.⁹

Como ya se mencionó, existen daños que afectan a toda una comunidad o un grupo de personas determinadas. En esos casos las reparaciones como la restitución deberán estar dirigidas a la sociedad en general.

Respecto de este tipo de reparaciones, el ex juez de la CIDH, Sergio García Ramírez expresa que la Corte tiene una orientación estructural tendente a remover las causas de las violaciones y no solo sus efectos.¹⁰ Las medidas de reparación dictadas en los casos donde México ha sido parte y cuyos criterios jurisprudenciales al igual que todos los generados en las sentencias dictadas por la CIDH resultan obligatorios, son de gran variedad y muestran opciones para orientar la perspectiva de reparación del daño tanto desde una dimensión individual como colectiva.

Esta CEDHJ tiene la facultad de reclamar la reparación integral del daño conforme lo dispone el artículo 73 de la ley que la rige a este organismo, ya que la reparación es un elemento fundamental para crear conciencia del principio de

⁹ Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción VI.

¹⁰ Sergio García Ramírez, Las Reparaciones en el Sistema Interamericano. El deber de Reparar y sus Dimensiones, Curso de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Coord., Édgar Corzo Sosa. Ciudad de México, Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, Centro Histórico, del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2013.



responsabilidad y enfrentar la omisión con la que las autoridades encargadas de garantizar el principio de legalidad y seguridad jurídica actúan.

En este caso en particular, el Ayuntamiento de Cabo Corrientes vulneró el derecho de la legalidad y seguridad jurídica; a la igualdad, al trato digno y no discriminación; así como a los derechos de las personas con discapacidad que habitan o transitan en su municipio, en consecuencia, el referido Ayuntamiento está obligado a reparar, ya que no se ha cumplido con la debida diligencia de garantizar los derechos humanos antes referidos.

V. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones:

Es importante referir que este municipio como el resto que conforman el estado de Jalisco, tienen el compromiso de “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole” para hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad, reconocidos en la CDPD.

Asimismo, la legislación en materia de discapacidad a nivel federal y estatal señala que los municipios están obligados a difundir los derechos de las personas con discapacidad; fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas con discapacidad; impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad; promover políticas, programas o acciones, que impulsen la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

Una vez analizada la información proporcionada por parte del Área de Seguimiento de esta CEDHJ, se desprende que el Ayuntamiento, si aceptó la Recomendación General 1/2018, emitida el 20 de febrero del mismo año, sin embargo no ha demostrado avances en su cumplimiento, ni las acciones suficientes para lograr el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o de la legislación federal y estatal en la materia, vulnerando con ello, los derechos humanos de la legalidad y seguridad jurídica; a la igualdad, al trato digno y no discriminación; así como a los derechos de las personas con discapacidad que habitan o transitan el territorio.



Ahora bien, con la finalidad de que, en el ámbito de su competencia, la persona titular y quienes integran el gobierno municipal continúen y concluyan los procesos pendientes, así como los asuntos que no han sido atendidos, se dirige la presente Recomendación, la cual pretende ser un sustento ético y de exigencia para todas las autoridades. La intención es abordar de manera integral el tema de la discapacidad, propiciar la participación responsable de diferentes sectores de nuestra sociedad para abonar a la plena garantía, promoción y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, y así migrar hacia un modelo social con enfoque de derechos humanos que contribuya a sembrar condiciones que permitan alcanzar la plena inclusión de este sector poblacional.

Así pues, con fundamento en los artículos 1° y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 7°, fracciones I y XXV; 28, fracción III; 66, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 109, 119, 120, 121 y 122 de su Reglamento Interior, se emiten las siguientes:

5.2 Recomendaciones:

A las y los integrantes del Ayuntamiento de Cabo Corrientes:

Primera. Implementen de forma urgente, las acciones que resulten necesarias para concretar la reparación integral del daño colectivo, en términos de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y demás legislación citada en el cuerpo de la presente resolución. Lo anterior, como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las personas con discapacidad que viven y transitan en el municipio.

La reparación integral del daño colectivo deberá realizarse bajo la perspectiva de la debida diligencia reforzada, e incluir, al menos, la atención inmediata e integral de cada una de las obligaciones señaladas como incumplidas en la presente resolución.

A efecto de lo anterior, se deberá considerar la siguiente matriz de indicadores de cumplimiento:



Proposición	Instrucción	Planeación	Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>1. Reglamento Municipal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, armonizado con los estándares legales internacionales, nacional y local en la materia. <i>(Fundamento: artículo 35 fracción IX de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Presentar propuesta de reglamento para revisión por parte de la CEDHJ</p>	<p>Presentar iniciativa de reglamento con sesión de cabildo. <i>(Criterios para la elaboración del reglamento: anexo 1)</i></p>	<p>Aprobar el reglamento en el Pleno.</p>	<p>Publicar el reglamento en la Gaceta Municipal.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación sobre el impacto en el cumplimiento del reglamento. <i>(Criterios para la creación de mecanismos de evaluación: anexo 3).</i></p>
<p>2. Dirección o Área de Inclusión especializada en atención a personas con discapacidad. <i>(Fundamento: artículo 1 fracción IV de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Se ponga en marcha el proyecto para la creación de una Dirección o Área especializada. Se asigne un presupuesto para su creación.</p>	<p>Se designe al personal encargado especialista en materia de discapacidad.</p>	<p>Presentar plan de trabajo con enfoque de derechos humanos, especializado y diferenciado. <i>(Criterios para la creación de agendas y planes de trabajo: anexo 2)</i></p>	<p>Ejecutar el plan de trabajo</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de la eficiencia de los trabajos realizados por la Comisión a partir del plan de trabajo presentado.</p>
<p>3. Programa municipal focalizado a realizar ajustes razonables para la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de inmuebles, e infraestructura arquitectónica en espacios públicos con atención a personas con discapacidad. <i>(Fundamento: artículos 6 fracción I inciso a, 35 fracciones II y III, y 68 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Convocatoria para la instalación de las mesas técnicas.</p>	<p>Instalar mesas técnicas de coordinación institucional a través del sistema municipal para la elaboración del programa. <i>(Criterios para la instalación de mesas técnicas: anexo 7)</i></p>	<p>Elaborar el programa que contenga: el diagnóstico situacional del municipio, las estrategias, líneas de acción, actividades e indicadores de cumplimiento, de resultado y de impacto. <i>(Criterios para la elaboración de programas: anexo 8)</i></p>	<p>Publicar el programa municipal.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación en el cumplimiento del programa a partir de los indicadores de cumplimiento, resultado e impacto.</p>



<p>4. Diagnóstico situacional de las personas con discapacidad que viven en el municipio y sus necesidades.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 31 de la CDPD)</i></p>	<p>Reunión de trabajo con instancias para la creación del diagnóstico.</p> <p><i>(Criterios para la creación de agendas y planes de trabajo: anexo 2)</i></p>	<p>Propuesta de instrumento para el levantamiento de información.</p>	<p>Levantamiento de información.</p>	<p>Entrega del diagnóstico y publicación de resultados.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación del diagnóstico.</p>
<p>5. Capacitación al personal de salud en el municipio sobre: “El Protocolo para la Atención, Diagnóstico, Clasificación y Certificación de la Discapacidad”, el cuál es el documento guía dirigido a personal del sector salud, público y privado, para la prestación de servicios de salud con perspectiva de inclusión y de derechos humanos para Personas con Discapacidad.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 4.1 inciso i, de la CDPD; y artículo 6, fracción II incisos d y e, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignación de presupuesto para la realización de la capacitación.</p> <p><i>(Criterios para la asignación de presupuesto: anexo 4)</i></p>	<p>Contratación de personal especializado que imparta la capacitación.</p>	<p>Realizar plan de capacitación que contenga objetivos generales y específicos por cada temática a impartir y duración.</p>	<p>Impartir los cursos y talleres especializados, evaluar los aprendizajes, así como a las y los capacitadores a través de instrumentos pre y post.</p>	<p>Crear mecanismo de evaluación que identifique el impacto que tuvo la capacitación en el ejercicio de las funciones de la persona capacitada; después de un tiempo razonable de haber egresado de la capacitación.</p>
<p>6. Protocolo de atención para la prestación del servicio público hacia las PcD.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 6 fracción II, y 35 fracción IX de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Mesa técnica para la elaboración del protocolo con instancias estatales y municipales.</p> <p><i>(Criterios para la instalación de mesas técnicas: anexo 7)</i></p>	<p>Elaboración de propuesta del protocolo de atención.</p> <p><i>(Criterios para la elaboración de protocolo: anexo 10)</i></p>	<p>Presentación y aprobación del protocolo de atención en cabildo.</p>	<p>Publicar el protocolo en la Gaceta Municipal</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de impacto en la implementación del protocolo.</p> <p><i>(Criterios para la creación de mecanismos de evaluación: anexo 3)</i></p>



<p>7. Capacitación del personal del Ayuntamiento sobre el marco jurídico de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en el ámbito internacional, nacional y local.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 4.1 inciso i, de la CDPD; y artículo 6 fracción II inciso d, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignación de presupuesto para la capacitación.</p>	<p>Contratación de personal especializado que imparta la capacitación.</p>	<p>Realizar plan de capacitación que contenga objetivos generales y específicos por cada temática a impartir y duración.</p> <p><i>(Criterios para la elaboración de capacitación: anexo 5)</i></p>	<p>Impartir los cursos y talleres especializados, evaluar los aprendizajes, así como a las y los capacitadores a través de instrumentos pre y post.</p> <p><i>(Criterios para la aplicación de evaluaciones: anexo 9)</i></p>	<p>Crear mecanismo de evaluación que identifique el impacto que tuvo la capacitación en el ejercicio de las funciones de la persona capacitada; después de un tiempo razonable de haber egresado de la capacitación.</p>
<p>8. Certificación del personal en la EC0385.01 “Prestación de servicios incluyentes para personas con discapacidad”.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 4.1 inciso i, de la CDPD; y artículo 6 fracción II inciso d, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignación de presupuesto para la certificación.</p>	<p>Selección de personal para la capacitación y evaluación.</p>	<p>Capacitación del personal en el Estándar de Competencia ECO385.01</p>	<p>Evaluación del personal en el Estándar de Competencia ECO385.01.</p> <p><i>(Criterios para la aplicación de evaluaciones: anexo 9)</i></p>	<p>Crear mecanismo de evaluación que identifique el impacto que tuvo la capacitación en el ejercicio de las funciones de la persona capacitada; después de un tiempo razonable de haber egresado de la capacitación.</p>
<p>9. Programas de rehabilitación dirigidos a las personas con discapacidad.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 4 fracción I y IX; 5 y 41 fracción I de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para el programa de rehabilitación física dirigida a personas con discapacidad.</p>	<p>Realizar programa de rehabilitación.</p> <p><i>(Criterios para la elaboración de programas: anexo 8)</i></p>	<p>Presentar y aprobar programa en cabildo.</p>	<p>Publicar programa en la Gaceta Municipal.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de resultados en la implementación del programa.</p>



<p>10. Programas para impulsar la economía de las personas con discapacidad mediante su integración laboral en el sector privado.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 5 bis, 35 fracción I, y 41 fracción III, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para el programa.</p> <p><i>(Criterios para la asignación de presupuesto: anexo 4)</i></p>	<p>Elaborar el programa que deberá incluir contenidos sobre la capacitación, promoción, permanencia y escalafón de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.</p>	<p>Presentar y aprobar programa en cabildo.</p>	<p>Publicar programa en la Gaceta Municipal.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de resultados en la implementación del programa.</p> <p><i>(Criterios para la creación de mecanismos de evaluación Anexo 3)</i></p>
<p>11. Programas de apoyo económico a personas cuidadoras de personas con discapacidad mental o intelectual severa.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para el programa de apoyo económico a personas cuidadoras.</p>	<p>Elaboración del programa de apoyo para personas cuidadoras.</p>	<p>Presentación y aprobación del programa de apoyo para personas cuidadoras.</p>	<p>Publicación del programa de apoyo a personas cuidadoras en la Gaceta Municipal.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de resultados en la implementación del programa.</p>
<p>12. Bolsa de trabajo dirigida a personas con discapacidad, para que ingresen al servicio público municipal.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 35 fracción IV, y 41 fracción III de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar espacios para la incorporación de personas con discapacidad en el servicio público municipal.</p>	<p>Publicar convocatoria en páginas oficiales.</p>	<p>Seleccionar a PcD para ocupar puestos en el servicio público municipal.</p>	<p>Incorporar al servicio público municipal a personas con discapacidad.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de resultados en la implementación de la bolsa de trabajo.</p>



<p>13. Páginas web oficiales accesibles para personas con discapacidad.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 6 fracción I incisos a y c, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para la adecuación de las páginas web oficiales.</p>	<p>Contratación de empresa o personal para la adecuación de las páginas web oficiales.</p>	<p>Propuesta para la realización de ajustes a las páginas web.</p>	<p>Adecuación de las páginas web oficiales, con el propósito de hacerlas accesibles para todas las personas con discapacidad.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la evaluación de resultados en la adecuación de los sitios web.</p>
<p>14. Campañas de difusión sobre: accesibilidad, inclusión y no discriminación de personas con discapacidad.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 6 fracción II inciso c, 41 y 63 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para la realización de las campañas.</p>	<p>Realizar propuesta de campaña.</p>	<p>Elaborar e imprimir el material audiovisual, infografías y otros que resulten accesibles para la difusión de la campaña.</p>	<p>Difundir la campaña a través de los medios accesibles, necesarios y disponibles, asegurando que las mismas lleguen a las y los destinatarios finales.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de impacto de la campaña.</p>
<p>15. Programa de ayudas técnicas para que a las y los estudiantes con discapacidad se les garantice de forma plena el ejercicio a su derecho a la educación en igualdad de condiciones.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 4 fracción II, 5 fracción I, y 64 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para el programa.</p>	<p>Contratación de personal para la realización de ayudas técnicas para alumnado con discapacidad.</p>	<p>Capacitación del personal para brindar ayudas técnicas para alumnado con discapacidad.</p>	<p>Incorporación de las ayudas técnicas para alumnado con discapacidad.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de impacto de las ayudas técnicas.</p>



<p>16. Acciones para dotar a las personas con discapacidad de ayudas técnicas como lo son lentes, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, bastones, implantes cocleares, entre otros.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 35 fracción VI de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para los apoyos a personas con discapacidad.</p>	<p>Propuesta de acciones para dotar a las personas con discapacidad.</p>	<p>Adquisición de lentes, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, bastones, implantes cocleares, entre otros.</p>	<p>Entregar ayudas técnicas como lo son lentes, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, bastones, implantes cocleares, entre otros.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de las ayudas técnicas.</p>
<p>17. Adaptación universal a la infraestructura de los centros de salud, centros educativos y oficinas administrativas del municipio.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 35 fracciones II y III de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para la adaptación de la infraestructura pública.</p>	<p>Propuesta de proyecto para la adaptación de la infraestructura.</p>	<p>Aprobación de la propuesta para la adecuación de la infraestructura de instituciones públicas.</p>	<p>Adecuación de la infraestructura de instituciones públicas.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de las adecuaciones estructurales.</p>
<p>18. Contar con personal intérprete en lengua de señas, y que exista en las instituciones municipales información escrita en formatos accesibles, de fácil comprensión y en sistema braille.</p> <p><i>(Fundamento: artículos 4 fracción III, 5 fracción I, y 6 fracción I incisos a y d, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para la contratación de personal.</p>	<p>Publicar convocatoria para la contratación de personal.</p>	<p>Contratar personal para ser intérprete.</p>	<p>Capacitar personal para ser intérprete en las instituciones municipales.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de impacto.</p>



<p>19. Programas para abrir espacios de inclusión social y cultural para personas con discapacidad.</p> <p><i>(Fundamento: artículo 5 fracción I, y 35 fracción V de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco)</i></p>	<p>Asignar presupuesto para el programa.</p>	<p>Elaborar programa para abrir espacios de inclusión.</p> <p><i>(Criterios para la elaboración de programas: anexo 8)</i></p>	<p>Presentar y aprobar programa para abrir espacios de inclusión.</p>	<p>Publicar programa para abrir espacios de inclusión.</p>	<p>Crear mecanismo que contenga la medición de impacto.</p>
---	--	--	---	--	---

Además, se adjuntan anexos específicos para orientar las acciones, estrategias y procesos que implemente el gobierno municipal. Lo anterior con el ánimo de favorecer la coordinación institucional.

Segunda. Bajo el principio de máxima protección y debida diligencia reforzada, se instruya para que un equipo interinstitucional y multidisciplinario revise los avances en el cumplimiento de la Recomendación general 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco, emitida por esta Comisión, así como los informes y recomendaciones que emiten otras instancias internacionales de las que México forma parte, a efecto de que se atiendan de forma urgente, eficiente y eficaz. En este proceso esta defensoría reitera su mejor disposición para el trabajo coordinado y conjunto.

Tercera. Designen a la persona o personas servidoras públicas, con las facultades legales suficientes, para fungir como enlace con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación.

Esta Recomendación tiene el carácter de pública, por lo que esta institución deberá darla a conocer a los medios de comunicación, de acuerdo con los artículos 79 de la ley que rige su actuación y 120 de su Reglamento Interior.



Con fundamento en los artículos 72, párrafo segundo, y 77, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se informa a la autoridad a la que se dirige, que tiene un término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que informe a este organismo si la acepta o no; en caso afirmativo, esta Comisión estará únicamente en espera de las constancias que acrediten su cumplimiento, las cuales deberán presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación.

De no ser aceptada o cumplida, las autoridades o servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 Bis de la ley de esta institución, la Comisión podrá solicitar al Congreso del Estado que comparezcan ante dicho órgano legislativo a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Es compromiso de este organismo coadyuvar con las autoridades, orientarlas y exigirles que su actuación refleje el alto compromiso e investidura que representan en un Estado constitucional y democrático de derecho.

Atentamente

Alfonso Hernández Barrón
Presidente

Esta es la última hoja de la Recomendación 174/2021 que consta de 52 páginas.